

Señores

JUZGADO DIECISIETE (17º) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

[j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j17cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**PROCESO:** VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
**DEMANDANTES:** KATHERIN YULIETH ROMERO MONTILLA Y OTROS  
**DEMANDADOS:** INGENIO DEL CAUSA S.A.S.  
**RADICADO:** 760013103017-2024-00136-00

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con NIT 860.026.518-6, representada legalmente por Manuel Francisco Obregón Trillos y con dirección de notificaciones judiciales al correo [notificacioneslegales.co@chubb.com](mailto:notificacioneslegales.co@chubb.com). De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** promovida por Katherin Yulieth Romero Montilla, quien actúa en representación de los menores Luisa María Collazos Romero y Luis Sebastián Collazos Romero en contra de Edison Nayiber Solarte, Ingenio del Cauca S.A.S. y Chubb Seguros Colombia S.A., anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

**I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**Frente al hecho “PRIMERO”:** Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser probado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, en observancia de la información consignada en el IPAT No. C 001582461 se verifica que el 24 de diciembre de 2023 ocurrió un accidente de tránsito que involucró al vehículo de placas FCU 90C, conducido por Edison Nayiber Solarte, y la motocicleta de placas UQE71D, conducido por Sebastián Collazos Ramos (QEPD), producto del cual falleció este último.

- No es cierto que el accidente de tránsito se produjo por causa imputable al conductor del vehículo de placas FCU 90C puesto que no es una hipótesis que encuentre respaldo probatorio comoquiera que no se menciona tanto en el informe policial de accidentes de tránsito, así como tampoco fue representado en el bosquejo topográfico. Sin perjuicio de lo anterior, se ha de poner de presente que el IPAT es un documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”). Ahora bien, en relación con las circunstancias que rodearon el accidente de tránsito es menester señalar que **el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) desató la normatividad de tránsito por no portar los elementos de protección requeridos (casco y chaleco reflectivo)**, los cuales se tornan aún más relevantes para salvaguardar la seguridad de los conductores en vías nacionales y en horas nocturnas, tal como se presentó en el caso objeto de estudio. Adicionalmente, debe resaltarse que el señor Collazos (QEPD) **tampoco contaba con licencia de conducción**, que lo facultara para el ejercicio de la actividad peligrosa que estaba realizando al momento del deceso. Adicionalmente, conforme la información consagrada en el SOAT, se verifica que la motocicleta no contaba con SOAT ni revisión técnico mecánica vigente. Véase:

**NOTA:** no, existe registro o información referente a licencias de conducción registradas a nombre del señor; **SEBASTIÁN COLLAZOS RAMOS**, en ninguno de los aplicativos conectados al sistema, con lo cual podemos inferir que el antes mencionado, no tenía los conocimientos básicos referente al acatamiento de las normas de tránsito estipuladas en la ley 769 de 2002, código nacional de tránsito, aunque esto no la exonera del desconocimiento de las leyes y normas que rigen en todo el territorio colombiano, como lo estipula el **código civil en su artículo; 9. ignorancia de la ley, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa.**

**Apreciación licencia de conducción:** la licencia de conducción, de conformidad con el artículo 2 del código nacional de tránsito es un documento público de carácter personal e intransferible exigido por la autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de un vehículo con validez en todo el territorio nacional. la licencia certifica entonces que quienes conducen vehículos automotores son personas capacitadas técnica y teóricamente para operar un vehículo automotor, y, por tanto, con los conocimientos y habilidades óptimas para reducir los riesgos que la actividad genera tanto para peatones como conductores. La licencia de conducción certifica, entonces, que quienes conducen vehículos automotores, actividad que tradicionalmente se ha considerado peligrosa, son realmente las personas a quienes el estado ha concedido autorización para ello, por haber verificado previamente su idoneidad para el desempeño de tal actividad, es decir, la aptitud, física, mental, sicomotora, práctica, teórica y jurídica de una persona para conducir un vehículo por el territorio nacional.

**Documento:** Informe Ejecutivo -FPJ- 3.

**Transcripción esencial:** No existe registro o información referente a licencias de conducción registradas a nombre del señor SEBASTIÁN COLLAZOS RAMOS, en ninguno de los aplicativos conectados al sistema, con lo cual podemos inferir que el antes mencionado, no tenía los conocimientos básico referente al acatamiento de las normas de tránsito.

Finalmente, vale poner de presente que el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) previamente había incurrido la normatividad de tránsito, tal como se advirtió en el Informe Ejecutivo -FPJ- 3 que milita en el expediente:

El señor conductor fue consultado en la página [www.simit.org.co](http://www.simit.org.co), fin verificación de multas o sanciones por infracciones al tránsito, **SI**, posee a la fecha pendientes de pago registrados en sistema Simit por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, en los organismos de tránsito conectados al sistema, por un valor de \$ (2.833.410) moneda corriente.

**Documento:** Informe Ejecutivo -FPJ- 3.

**Transcripción esencial:** Sí posee a la fecha pendientes de pago registrados en sistema Simit por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, en los organismos de tránsito conectados al sistema, por valor de \$ (2.833.410) moneda corriente

- A mi representada no le consta de manera directa quién ostenta la propiedad sobre el vehículo de placas FCU 90C, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “SEGUNDO”:** Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser probado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.
- Lo expresado por el apoderado judicial de los demandantes no constituye un hecho sino, por el contrario, es una afirmación subjetiva que no puede ser contestada en los términos del numeral 2° del artículo 96 del Código General del Proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se itera que la afirmación relativa a las causas aducidas carece de sustento probatorio pues no reposa prueba conducente que permita llegar a tal conclusión, puesto que se recuerda que el IPAT consagra únicamente una hipótesis que no tiene la virtualidad de endilgar responsabilidad a la pasiva. En adición, se resalta que el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) para el momento de los hechos que suscitaron el presente litigio no se encontraba utilizando los elementos de protección obligatorios, es decir, el casco y el chaleco reflectivo, este último tomando vital importancia para el caso de marras pues el accidente tuvo lugar en horas de la noche. Adicionalmente, conforme la información consagrada en el SOAT, se verifica que la motocicleta no contaba con SOAT ni revisión tecno mecánica vigente.

**Frente al hecho “TERCERO”:** Lo expresado por el apoderado judicial de los demandantes no constituye

un hecho sino, por el contrario, es una afirmación subjetiva que no puede ser contestada en los términos del numeral 2° del artículo 96 del Código General del Proceso. Sin embargo, se rechaza que se atribuya la causa del accidente al conductor de vehículo de placas FCU 90C dado que no militan pruebas que acrediten una conducta reprochable del señor Edison Nayiber Solarte sino que, por el contrario, se encuentra probada la incidencia del occiso en el supuesto hecho dañoso pues no se encontraba utilizando los elementos de protección obligatorios, es decir, el casco y el chaleco reflectivo, este último tomando vital importancia para el caso de marras pues el accidente tuvo lugar en horas de la noche. Adicionalmente, conforme la información consagrada en el SOAT, se verifica que la motocicleta no contaba con SOAT ni revisión tecno mecánica vigente.

**Frente al hecho “CUARTO”:** A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Empero, se itera que el IPAT es un documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la *“suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”*).

**Frente al hecho “QUINTO”:** A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Empero, se advierte que el informe ejecutivo es un documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el patrullero que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la *“suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”*).

**Frente al hecho “SEXTO”:** A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. No obstante, las circunstancias alegadas por la parte demandante no tuvieron incidencia en el supuesto hecho dañoso, por lo cual no han de ser tenidas en cuenta para resolver el presente litigio. En adición, se resalta que de conformidad con la información consagrada en el IPAT, el vehículo de placas FCU 90C sí contaba con revisión tecno mecánica y SOAT vigente.

**Frente al hecho “SÉPTIMO”:** Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- No le asiste razón al demandante al indicar que los hechos aquí ocurridos comportan un siniestro en sí mismo, comoquiera que el **extremo activo no acreditó bajo ningún medio probatorio la responsabilidad civil que se pretende endilgar, de tal manera que consecuentemente no se estarían cumplimiento con los requisitos para afectar el seguro en los términos del Art. 1077 del C. Co.** Contrario a ello se encuentra acreditada la culpa exclusiva de la víctima directa por desacatar las normas de tránsito.
- Es cierto que mi prolijada suscribió la Póliza Todo Riesgo Maquinaria y Equipo No. 1655. No obstante, la mera existencia de un contrato de seguro no implica el nacimiento a la vida jurídica de la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía aseguradora. Corolario a lo previamente destacado, es menester resaltar que, el surgimiento de cualquier obligación en el asunto se encuentra condicionada a que se pruebe: (i) la materialización del siniestro ; (ii) que los hechos hubieren ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, y; (iii) que no se configure ninguna exclusión o causal legal o convencional de inoperancia del contrato de seguro. Solo de llegarse a cumplir los requisitos expuestos de manera concurrente, habría lugar a una obligación indemnizatoria en cabeza de mi amparada.

**Frente al hecho “OCTAVO”:** Como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas de la siguiente manera:

- Es cierto que se aportaron los documentos referidos junto con el escrito genitor del proceso.
- No es cierto que de la documentación adosada se colige que el accidente de tránsito ocurrido el 24 de diciembre de 2023 tuvo causa imputable en el conductor del vehículo de placas FCU 90C pues se itera que tanto el IPAT como el informe ejecutivo son documentos que no tienen virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el agente de tránsito y el patrullero que los suscribieron no fueron testigos de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”).

**Frente al hecho “NOVENO”:** A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “DÉCIMO”:** A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Sin embargo,

se advierte que en el expediente no obran medios probatorios que acrediten los supuestos ingresos percibidos por el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) así como tampoco la actividad económica referida. Si bien se aportó una certificación laboral, la misma no cuenta con los parámetros legales y jurisprudenciales previstos para dotar de valor probatorio dicho documento y, de manera preliminar se señala que en el acápite de pruebas que solicitará la ratificación de la certificación aportada, por lo cual carecerá de valor alguno hasta que no se surta el respectivo trámite.

**Frente al hecho “DÉCIMO PRIMERO”:** A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que escapa de su órbita de actuación en calidad de aseguradora, por lo cual deberá ser probada por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “DÉCIMO SEGUNDO”:** Es cierto conforme se evidencia en la constancia de no acuerdo No. 178-2024 aportada con el libelo de demanda.

## II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, en la medida en que no se reúnen los supuestos esenciales para que se estructure la Responsabilidad Civil Extracontractual. De esta manera, y con el ánimo de lograr una indudable precisión frente a los improbados requerimientos pretendidos en la demanda, me referiré a cada pretensión de la siguiente manera:

**Frente a la pretensión de declaración de responsabilidad civil (Sin enumeración): ME OPONGO** a la prosperidad de la pretensión de declarar civil y solidariamente responsable al extremo pasivo del litigio en atención a que al interior del expediente no obran elementos probatorios que permitan acreditar la existencia de responsabilidad de los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante derivados del accidente de tránsito acontecido el 24 de diciembre 2023. Contrario a lo pretendido por la parte accionante en el asunto, es plausible que en el caso el Despacho exima de responsabilidad alguna los demandados debido a que (i) la parte demandante no acreditó que el accidente de tránsito ocurrido el 24 de diciembre de 2023 hubiere devenido de la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, pues los demandantes basa sus infundadas pretensiones de forma única y exclusiva en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (en adelante, “IPAT”), documento este que carece de virtualidad para dictaminar una responsabilidad como la pretendida por los demandantes. (ii) el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) desacató la normatividad de tránsito por no portar los elementos de protección requeridos (casco y chaleco reflectivo), los cuales se tornar aún más relevantes para salvaguardar la seguridad de los conductores en vías nacionales y en horas nocturnas, tal como se presentó en el caso objeto de estudio. Adicionalmente, debe resaltarse que el señor Collazos (QEPD)

tampoco contaba con licencia de conducción que lo facultara para el ejercicio de la actividad peligrosa que estaba realizando al momento del deceso. Adicionalmente, conforme la información consagrada en el SOAT, se verifica que la motocicleta no contaba con SOAT ni revisión tecno mecánica vigente. (iii) No se configuró el riesgo asegurado y la obligación condicional por parte de CHUBB, por cuanto la póliza No. 1655 no presta cobertura material para los hechos que se ventilan en el proceso, así como tampoco se acreditó el siniestro ni la cuantía de la pérdida (iv) finalmente, no hay lugar a declarar la responsabilidad solidaria en cabeza de la compañía aseguradora ya que no tuvo intervención de ninguna clase en el accidente de tránsito, sino que su vinculación al proceso obedece de forma exclusiva a la celebración de un contrato de seguro, el cual no es fuente para predecir la solidaridad de una obligación. Por lo anterior, solicito al Despacho denegar lo pretendido por la parte actora.

**Frente a la pretensión “A”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por concepto de LUCRO CESANTE, toda vez que es condicional y consecuencial a la declaración de primera pretensión, por las razones antes expuestas, no puede ser reconocida, la cual como se señaló se encuentra avocada a su fracaso, en efecto debe soportar la misma suerte de aquella. Adicionalmente, me opongo al reconocimiento de las sumas pretendidas bajo este concepto por cuanto no se encuentran acreditados los ingresos que percibía el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) con anterioridad al accidente del 23 de diciembre de 2024, así como tampoco la supuesta actividad económica que desarrollaba. Si bien se aportó una certificación laboral, la misma no cuenta con los parámetros legales y jurisprudenciales previstos para dotar de valor probatorio dicho documento y, de manera preliminar se señala que en el acápite de pruebas que solicitaré la ratificación de la certificación aportada, por lo cual carecerá de valor alguno hasta que no se surta el respectivo trámite.

**Frente a la pretensión “B”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por concepto de DAÑO MORAL porque no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad. Adicionalmente, me opongo a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Así, el reconocimiento del daño moral es improcedente por cuanto: (i) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, no reconoce los valores en SMLMV. Los valores que reconoce son en pesos y hasta un límite máximo de \$72.000.000 en caso de muerte para el primer nivel o grado sanguíneo.

**Frente a la pretensión “C”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por concepto de DAÑO MORAL porque no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad. Adicionalmente, me opongo a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Así, el reconocimiento del daño moral es improcedente por cuanto: (i) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, no reconoce los valores en SMLMV. Los valores que reconoce son en pesos y

hasta un límite máximo de \$72.000.000 en caso de muerte para el primer nivel o grado sanguíneo.

**Frente a la pretensión “D”:**ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por concepto de ALTERACIÓN GRAVE A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA porque no hay lugar a reconocer la suma solicitada, por cuanto no se configuran los elementos axiológicos de la responsabilidad civil deprecada. Subsidiariamente el reconocimiento es improcedente por cuanto: (i) La tipología de perjuicio tal como fue pretendida en el libelo de demanda no corresponde a una modalidad de daño que se reconozca en la especialidad civil en la jurisdicción ordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, de llegarse a reconocer sería bajo el concepto de “daño a la vida de relación”, el cual se causa únicamente a favor de la víctima directa (ii) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, no reconoce los valores en SMLMV. Los valores que reconoce son en pesos y únicamente para la víctima directa, no para las indirectas (iii) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, no reconoce los valores en SMLMV. Los valores que reconoce son en pesos y únicamente para la víctima directa, no para las indirectas, (iv) Las sumas pretendidas por los demandantes, son exageradas y no se encuentran corroboradas mediante los medios de prueba útiles, conducentes y pertinentes. En este caso, la suma de 100 SMLMV (\$116.000.000) para cada uno de los demandantes es exagerada y revela un afán de lucro injustificado.

**Frente a la pretensión “E”:**ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión por concepto de ALTERACIÓN GRAVE A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA porque no hay lugar a reconocer la suma solicitada, por cuanto no se configuran los elementos axiológicos de la responsabilidad civil deprecada. Subsidiariamente el reconocimiento es improcedente por cuanto: (i) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, no reconoce los valores en SMLMV. Los valores que reconoce son en pesos y únicamente para la víctima directa, no para las indirectas (ii) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, no reconoce los valores en SMLMV. Los valores que reconoce son en pesos y únicamente para la víctima directa, no para las indirectas, (iii) Las sumas pretendidas por los demandantes, son exageradas y no se encuentran corroboradas mediante los medios de prueba útiles, conducentes y pertinentes. En este caso, la suma de 100 SMLMV (\$116.000.000) para cada uno de los demandantes es exagerada y revela un afán de lucro injustificado.

**Frente a la pretensión “F”:**ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión, habida cuenta de que al no estar acreditados los elementos que configuran responsabilidad civil en cabeza del de los demandados, no existe obligación alguna que implique actualizar el monto y/o cálculo de los perjuicios.

**Frente a la pretensión “G”:**ME OPONGO a la prosperidad de esta pretensión, habida cuenta de que al no estar acreditados los elementos que configuran responsabilidad civil en cabeza del de los demandados, no existe obligación alguna que implique el pago de costas y agencias en derecho.

### III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del C.G.P., y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a OBJETAR el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos.

En el presente caso, los demandantes estimaron el lucro cesante por valor de \$192.203.218, discriminado de la siguiente manera:

- Para la menor Luisa María Collazos Romero: \$88.290.519
- Para el menor Luis Sebastián Collazos Romero: \$103.912.699

Precisado lo anterior, se objeta el juramento estimatorio en los siguientes términos:

En efecto, se verifica que el juramento estimatorio toma como base un ingreso mensual de \$1.500.000, sin embargo, no existe prueba alguna en el expediente que permita corroborar el ingreso mensual señalado, limitando su "existencia" a las simples afirmaciones realizadas en el escrito petitorio por la parte actora, siendo improcedente su reconocimiento e incluso su liquidación sobre esta base salarial, junto con el 25% correspondiente a las prestaciones sociales teniendo en cuenta la incertidumbre de la existencia de una relación laboral o de índole similar que justifique que la víctima perciba pago alguno por este concepto. Por lo tanto, no encuentra justificación alguna el hecho de que la parte demandante adicione al supuesto ingreso percibido el valor del 25% correspondiente a prestaciones sociales para derivar de ahí el supuesto perjuicio reclamado.

Ciertamente, no se encuentran acreditados los ingresos que percibía el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) con anterioridad al accidente del 24 de diciembre de 2024, así como tampoco la supuesta actividad económica que desarrollaba. Si bien se aportó una certificación laboral la misma no cuenta con los parámetros legales y jurisprudenciales previstos para dotar de valor probatorio dicho documento y, de manera preliminar se señala que en el acápite de pruebas que solicitará la ratificación de la certificación aportada, por lo cual carecerá de valor alguno hasta que no se surta el respectivo trámite.

En conclusión, no es procedente el reconocimiento de lucro cesante, en tanto que se acreditó por medio de prueba útil, conducente y pertinente los ingresos percibidos por la víctima con anterioridad al accidente. De modo tal que, al no encontrarse probados los perjuicios que alega en el juramento estimatorio, es jurídicamente improcedente su reconocimiento conforme a la necesidad de prueba sobre la existencia y cuantía que exige el reconocimiento de los daños.

En los términos anteriores, queda presentada la OBJECCIÓN al juramento estimatorio.

#### IV. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

##### **EXCEPCIONES FRENTE A LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA PASIVA**

#### **1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CONFIGURARSE EL HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA**

La demanda no está llamada a prosperar debido a que el accidente materia de litigio, ocurrió como consecuencia del hecho de la propia víctima. Así las cosas, se pone de presente ante el Despacho que en el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna al conductor de vehículo de placas FCU 90C, por el presunto accidente acaecido el 24 de diciembre de 2023 producido como consecuencia la colisión entre el vehículo en mención y la motocicleta de placas UQE 71D, en el que resultó herido el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD). Lo anterior, se sustenta en (i) la víctima directa desatendió el deber de cuidado en tanto no portaba los elementos de protección necesarios para la conducción de motocicletas (casco y chaleco reflectivo), impidiendo su visibilización para otros agentes viales y (ii) el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) no contaba con licencia de conducción que lo facultara a manejar la motocicleta. Adicionalmente, conforme la información consagrada en el SOAT, se verifica que la motocicleta no contaba con SOAT ni revisión técnico mecánica vigente. En ese sentido, en atención a que se configura la culpa exclusiva de la víctima, no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad del extremo pasivo de la litis.

Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, la responsabilidad civil por actividades peligrosas admite la intervención exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad, toda vez que, no se puede desconocer que la conducta bien sea positiva o negativa de la víctima pudo tener una incidencia relevante en el examen de responsabilidad civil, ya que su comportamiento podría corresponder a una condición o incluso a la producción misma del daño.

*“(…) Cuando hablamos del hecho de la víctima, nos referimos a una causal que impide efectuar la imputación, en el sentido en que, si bien es cierto, que puede ser que el demandado causó el daño física o materialmente, el mismo no puede serle imputable en la medida en que el actuar de la víctima que le resultó extraño, imprevisible e irresistible, lo llevó a actuar de forma que causara el daño, razón por la cual el mismo es imputable*

*desde el punto de vista jurídico a la víctima y no al demandado (...).<sup>1</sup>*

Como se evidencia en el precitado pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en reconocer que, para la configuración de esta causal eximente o atenuante de responsabilidad, basta con acreditar la irresistibilidad o imprevisibilidad del comportamiento de la víctima, misma que no podía ser evitada por quien causó materialmente el daño, es decir, que si bien el presunto responsable causó el daño la acción desplegada no fue la causa eficiente y determinante en la producción del mismo. Situación que efectivamente ocurre en el caso de marras, puesto que, la conducta imprudente del señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD), como conductor de la motocicleta de placas UQE71D, confluó significativamente en la ocurrencia del accidente. Ello en atención a que, **se puso en peligro a él y a los demás actores viales al decidir manejar un vehículo sin ser propietario de la licencia de conducción y sin usar los elementos de protección requeridos para lograr una visibilidad frente a otros conductores.**

De este modo, el comportamiento de hecho y de derecho de la víctima es determinante y autónomo en la producción de los hechos demandados. Ciertamente, fue el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) quien en incumplimiento de las normas de tránsito se expuso a la creación del riesgo y, en consecuencia, no existe razones de hecho ni de derecho por la cuales pueda atribuirse responsabilidad al conductor del vehículo de placas FCU 90C, quien, en todo caso, condujo el vehículo bajo el cumplimiento de las normas de tránsito.

Presta importancia relevancia la ausencia de licencia de conducción por parte del señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD), comoquiera que dicho documento certifica la capacidad e idoneidad para conducir un vehículo, previo al conocimiento técnico que para ellos se debe tener. Tal circunstancia pudo verificarse en la investigación penal que se adelantó por estos hechos:

---

<sup>1</sup> Patino, Héctor: Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. 24 de febrero de 2011. Universidad Externado de Colombia

**NOTA:** no, existe registro o información referente a licencias de conducción registradas a nombre del señor; **SEBASTIÁN COLLAZOS RAMOS**, en ninguno de los aplicativos conectados al sistema, con lo cual podemos inferir que el antes mencionado, no tenía los conocimientos básicos referente al acatamiento de las normas de tránsito estipuladas en la ley 769 de 2002, código nacional de tránsito, aunque esto no la exonera del desconocimiento de las leyes y normas que rigen en todo el territorio colombiano, como lo estipula el **código civil en su artículo 9. Ignorancia de la ley, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa.**

**Apreciación licencia de conducción:** la licencia de conducción, de conformidad con el artículo 2 del código nacional de tránsito es un documento público de carácter personal e intransferible exigido por la autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de un vehículo con validez en todo el territorio nacional. la licencia certifica entonces que quienes conducen vehículos automotores son personas capacitadas técnica y teóricamente para operar un vehículo automotor, y, por tanto, con los conocimientos y habilidades óptimas para reducir los riesgos que la actividad genera tanto para peatones como conductores.

La licencia de conducción certifica, entonces, que quienes conducen vehículos automotores, actividad que tradicionalmente se ha considerado peligrosa, son realmente las personas a quienes el estado ha concedido autorización para ello, por haber verificado previamente su idoneidad para el desempeño de tal actividad, es decir, la aptitud, física, mental, sicomotora, práctica, teórica y jurídica de una persona para conducir un vehículo por el territorio nacional.

**Documento:** Informe Ejecutivo -FPJ- 3.

**Transcripción esencial:** No existe registro o información referente a licencias de conducción registradas a nombre del señor **SEBASTIÁN COLLAZOS RAMOS**, en ninguno de los aplicativos conectados al sistema, con lo cual podemos inferir que el antes mencionado, no tenía los conocimientos básico referente al acatamiento de las normas de tránsito.

La expedición de la licencia de conducción permite acreditar que quien la porta cuenta con las aptitudes necesarias para la conducción, es decir, con los conocimientos técnicos y necesarios que se requieren para desarrollar una actividad catalogada como peligrosa. En tal sentido, es posible concluir que, ante la falta de dicho documento, el señor Sebastián Collazos no contaba con las aptitudes y conocimientos técnicos para la ejecución de dicha actividad, por lo que es válido afirmar que la causa del accidente se debió también a su falta de pericia, es decir, a su falta de conocimientos para la conducción del vehículo en el que se desplazaba.

Por otro lado, el Código Nacional de Tránsito terrestre en su artículo 94 consagra la obligación en cabeza de los motociclistas de usar casco y chaleco reflectivo cuando se estén movilizando:

***“(…) Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:***

*Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.*

***Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.***

*Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.*

*No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.*

*No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.*

*Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.*

*No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.*

*Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código.*

**Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte.**

*La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo (...)"*

Visto lo anterior, es claro que la Ley considera de vital importancia que los conductores de motocicletas porten el casco de seguridad y el chaleco reflectivo, este último cuando se esté manejando en horas de la noche, con el propósito de brindar mayor protección para quien conduce el automotor y para los demás actores viales, situación que omitió flagrantemente el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) desconociendo los mínimos de responsabilidad y cuidado que se deban tener a la hora de conducir un vehículo en una vía pública.

En adición, resulta de vital importancia precisar, conforme la información consagrada en el SOAT, se verifica que la motocicleta en la que se desplazaba el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) no contaba con SOAT ni revisión tecno mecánica vigente, supuesto relevante a la hora de efectuar el análisis causal del supuesto hecho dañoso bajo el entendido que las condiciones precarias del rodante y la ausencia de autorización para circular pudieron influir en la materialización del evento.

Producto de lo expuesto se colige que en el caso objeto de estudio no es dable declarar la responsabilidad civil que pretende endilgar la parte actora por cuanto el hecho exclusivo de la víctima como la ausencia de medios probatorios que acrediten el hecho dañoso, necesariamente se traduce en la inexistencia de la inferencia lógica que une la conducta desplegada por la pasiva con el supuesto daño padecido por las demandantes, siendo este último un elemento fundante de la responsabilidad civil.

La relación de causalidad es un requisito sine qua non para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Como acotamos anteriormente, este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas.

Para esta etapa procesal no se encuentra probada la existencia de responsabilidad civil que pueda estructurarse e imputarse a los codemandados en razón a que no están acreditadas las circunstancias modales y tempo-especiales del hecho de tránsito. En consecuencia, al no existir criterio material o normativo de imputación del daño a las aquí codemandadas, es forzosa la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto resulta notorio que la causa eficiente, única y definitiva del accidente recae sobre el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD). De tal suerte, deberán negarse las pretensiones de la demanda, lo anterior toda vez que es posible observar que el señor Sebastián inobservó las normas de tránsito que le asistían como actor vial, con lo que se expuso al resultado fatal que lamentablemente acaeció. Lo anterior, de acuerdo con las pruebas que militan en el expediente, en las que se constata que la causa del accidente que aquí nos ocupa estuvo en cabeza exclusiva de la víctima, sin que pueda pretender la indemnización a cargo de un tercero que no tuvo participación alguna en el resultado fatal.

En ese contexto, solicito respetuosamente al despacho se sirva declarar probada esta excepción.

## **2. REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DEL SEÑOR SEBASTIÁN COLLAZOS RAMOS (Q.E.P.D.) EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO**

En gracia de discusión y de manera subsidiaria a la excepción de culpa exclusiva de la víctima, debe tenerse en cuenta que en el remoto evento en el que se acredite que el accidente se produjo por un actuar de los demandados, pese a que está totalmente demostrado que no fue así, de todas maneras, se deberá reducir la eventual indemnización como consecuencia de la participación de la víctima en el suceso. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) ya que (i) al momento del accidente de tránsito no contaba con los elementos de seguridad requeridos, especialmente el chaleco reflectivo que permitiera su visibilidad respecto de otros agentes viales y (ii) el motociclista no contaba con licencia de conducción, evidenciado su falta de habilidad y destreza para la conducción de automotores. Adicionalmente, conforme la información consagrada en el SOAT, se verifica que la motocicleta en la que se desplazaba el señor Sebastián Collazos Ramos no contaba con SOAT ni revisión tecno mecánica vigente

Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia del señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) en la ocurrencia del daño. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño que sufrió el causante y los demandantes, como consecuencia de las conductas imprudentes del señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) Así es como lo ha indicado la jurisprudencia en reiteradas ocasiones:

*“(…) Para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurren en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según el cual **“[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”**. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación “compensación de culpas (…)”<sup>2</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 40 % de los perjuicios:

*“(…) En cuanto a la conducta de la víctima, analizada desde lo culpabilístico, es concurrente del hecho dañoso, por infringir los artículos 77 y 79 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), al aparcar en lugar prohibido y sin encender las luces de parqueo. Empero, la violación de tales normas viales no resulta incidentes en un 50% de la causa del accidente, pues amén de su transgresión, el otro maquinista lo vio a cierta distancia estacionado, sólo que éste fue negligente, pues al no disminuir la velocidad ni cambiar de calzada, chocó con él.*

*Sin embargo, **aunque el obrar de Carlos Alirio Méndez Lache no fue determinante en una mitad en la producción del resultado dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al momento de la colisión la actividad peligrosa de la conducción, fue causante como mínimo del mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor.***

*Debió entonces tomar “precauciones” a fin de evitar el siniestro, como haber parqueado en una berma, o en un lugar permitido para ello, evitando, en todo caso, convertirse en un obstáculo directo para vehículos en marcha en un segmento de la vía que les permite alcanzar altas velocidades. Así las cosas, la mencionada negligencia y situación de riesgo provocada por el demandante, conducen a esta Corte, en atención a los elementos concausales y culpabilísticos, a modificar su porcentaje de concurrencia en un 40% (…)”<sup>3</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

<sup>2</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 3579. No publicada.

<sup>3</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-032-2011-00736-01. junio 12 de 2018.

Como se lee, el fallador encontró probada la incidencia de la víctima en la causa generadora del daño en proporción a un 40% y en ese sentido redujo los perjuicios que se probaron en el proceso en el mismo porcentaje. Como quiera que la responsabilidad del Demandado resultó menguada por la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del suceso. De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima y del tercero que conducía la motocicleta, en la ocurrencia del daño por el cual solicita indemnización.

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido el 24 de diciembre de 2023. Deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño mínimo y a lo sumo es del 40%. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación del conductor de la motocicleta en la ocurrencia del accidente de tránsito, como mínimo en un 40%.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### **3. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL – EL IPAT NO ES MEDIO DE PRUEBA FEHACIENTE**

Se formula esta excepción por cuanto en el presente proceso es claro que el único medio probatorio con el cual la parte demandante pretende probar la responsabilidad civil del conductor del vehículo de placas FCU 90C es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil puesto que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 1 hora después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”).

Las pretensiones carecen de fundamento, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de los demandados, y por ende de mi representada, ya que en la esfera de la responsabilidad civil implorada no se constituyen los elementos necesarios para que la misma sea predicada (daño, conducta reprochable desplegada por la parte pasiva y nexo de causalidad), pues en el caso que nos ocupa, de haberse presentado algún tipo de perjuicio, este se deriva de hechos en los que ninguna injerencia tuvo el demandado y por ende, como a él se le trata de endilgar una responsabilidad Civil Extracontractual, hay que señalar que es inexistente nexo alguno de causalidad que permita edificar

semejante cargo.

Igualmente, se debe señalar que en el Capítulo V de la Resolución 11268 de 2012, se indica de forma clara que, en todo caso, la hipótesis que indique el agente de tránsito NO IMPLICA RESPONSABILIDAD PARA LOS CONDUCTORES:

Recuerde que la hipótesis indicada no implica responsabilidades para los conductores, sino que expresan las acciones generadoras o intervinientes en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentadas mediante la objetividad y el análisis técnico-científico de los elementos materiales de prueba y evidencia física encontrada en el lugar de los hechos.

El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas.

Es decir, el hecho de que la parte actora haya aportado este informe, no quiere decir que se encuentre probada la responsabilidad del conductor del vehículo de placas FCU 90C, toda vez que deberá ser valorado en conjunto con las demás pruebas que se aporten y se practiquen en la etapa probatoria del proceso. Así las cosas, la conclusión de las causas que dieron origen al accidente de tránsito, corresponde al fondo del presente litigio.

Por otra parte, es importante reseñar que el IPAT no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que estos informes tienen parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente o policía como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

*“(...) El informe contendrá por lo menos:*

*Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.*

*Clase de vehículo, número de la placa y demás características.*

*Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y*

*compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.*

*Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.*

*Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos. Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.*

*Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.*

*Descripción de los daños y lesiones.*

*Relación de los medios de prueba aportados por las partes.*

**Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes**. (negrita fuera del texto original).”

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de este:

*“(...) Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa (...)”*

De lo reseñado de manera precedente, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del evento de tránsito recae en cabeza del conductor del vehículo de placas FCU 90C.

En conclusión, en el caso sub examine, la parte demandante pretende atribuir responsabilidad exclusivamente con el IPAT, el cual contiene una mera hipótesis incapaz de demostrar los elementos estructurales de la responsabilidad a cargo de la parte demandada, razón por la cual el documento no tiene la virtualidad para endilgar responsabilidad alguna a la pasiva, máxime cuando la información que

se consigna allí no fue presenciada directamente por el agente de tránsito.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

#### **4. CUANTIFICACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTE**

Se propone esta excepción, sin que con ello se esté reconociendo responsabilidad a cargo de mi procurada, solo para manifestar que bajo el hipotético caso en que el Juzgado emitiera un fallo condenatorio al extremo pasivo, las sumas reclamadas por concepto de perjuicios morales deben necesariamente reajustarse para reconocer (si a ello hubiere lugar) lo que efectivamente correspondiera al extremo actor. Se tiene que la parte activa solicita una cuantiosa indemnización por unos presuntos perjuicios inmateriales y resulta pertinente poner de presente que la tasación de los mismos, sobrepasan a todas luces los lineamientos jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema de Justicia.

Con respecto a la tasación de los perjuicios morales resulta a todas luces improcedente y excesiva su tasación, toda vez que los demandantes pretenden una suma de dinero que desconoce los criterios que ha establecido la Corte Suprema de Justicia, cuando los perjuicios morales se causan por la vulneración de los sentimientos íntimos de una persona o por la afectación en su esfera subjetiva, emocional e interna, lo cual para el caso en concreto no se encuentra acreditada, pues no hay una prueba siquiera sumaria que vislumbre al despacho que a los aquí demandantes se le causó un daño emocional tan grave que amerite el reconocimiento de este perjuicio, más aún cuando se precisa que este perjuicio no se presume, sino que debe acreditarse.

Por otro lado, el reconocimiento por perjuicios inmateriales no opera de manera automática, ante la ocurrencia de un hecho dañoso ni se presume en todos los casos, de allí que corresponda al juez, dentro de un análisis minucioso, objetivo y detallado de la situación, concluir si se acreditó o no la existencia de tal perjuicio, y acto seguido de encontrar probado, le corresponde determinar su cuantía, atendiendo a criterios razonables y proporcionales que no generen un enriquecimiento injustificado a favor de los demandantes.

En este punto es importante señalar que, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado: *“(…) para la valoración del quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador (…)”*.

Por lo tanto, es el Juez en el desarrollo de la etapa probatoria quien determinará si efectivamente hubo

responsabilidad a cargo de los aquí demandados, y en caso de que este improbable suceso ocurra, atendiendo las circunstancias específicas del caso, entrará a determinar el verdadero grado de afectación de los demandantes y fijará los montos de indemnización a que haya lugar, sin que estos puedan exceder los límites fijados por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Civil, respecto de la reparación o compensación de los perjuicios inmateriales, en este caso, frente al daño moral.

Ahora bien, si en gracia de discusión resultara probada la supuesta falla en que incurrió la pasiva, las sumas reclamadas son abiertamente desproporcionadas y contrarían los parámetros que jurisprudencialmente se han dictado sobre el asunto.

Para ilustrar de forma puntual la manera en que la Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación un caso particular. Así pues, en sentencia del 22 de octubre de 2021 con radicación No. 2001-01048-01, la Sala Civil de la Corte analizó el caso de un hombre que falleció en un accidente aéreo. En dicho caso, que resulta particularmente reciente, se reconoció la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS (\$ 47.472.181) a la cónyuge e hijos de la persona fallecida. En otro penoso caso que resulta similar al presente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020 con proceso radicado No. 2011-00020-01 decidió reconocer la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$ 55.000.000) a la cónyuge e hijos por concepto de daño moral por la muerte de un hombre en un accidente de tránsito.

La Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral. En tal sentido, es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte demandante resultan equivocados y exorbitantes. Puesto que, siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de fallecimiento, la Corte ha fijado como baremo indemnizatorio el tope de \$60.000.000 para los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, tal y como se muestra a continuación:

*“(...) Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación de cara a las trágicas e inesperadas circunstancias en que aconteció la muerte del señor Ramírez Zuluaga, se fija **en la suma de sesenta millones de pesos (\$60.000.000)** el monto de los perjuicios morales que deberán ser resarcidos a la demandante en su calidad de cónyuge de la víctima (...)”<sup>4</sup>(Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 07/03/2019. MP Octavio Augusto Tejeiro Duque, Rad: 05001 31 03 016 2009-00005-01.

pretendidas por la parte demandante. Pues, en primer lugar, solicitar 100 SMMLV para cada demandante resulta exorbitante, dado que el tope indemnizatorio fijado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia corresponde a \$ 72.000.000 en los casos más graves y sólo a los parientes dentro del primer grado de consanguinidad, cuando aplica. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En conclusión, es claro que la parte demandante, con la solicitud de reconocimiento de este perjuicio, no acredita con ningún medio de prueba los requisitos mínimos necesarios para que sea reconocido este concepto indemnizatorio, toda vez que no hay congruencia entre lo pretendido, lo que pretende probar la parte demandante y los lineamientos que al respecto ha emitido la Sala Civil de la Corte, sus peticiones son abiertamente inconducentes e injustificadas, por cuanto sus pedimentos superan el baremo jurisprudencial que sobre el daño moral ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en casos de fallecimiento de la víctima.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

## **5. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO DENOMINADO ALTERACIÓN GRAVE A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA**

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que la tipología de perjuicio tal como fue pretendida en el libelo de demanda no corresponde a una modalidad de daño que se reconozca en la especialidad civil en la jurisdicción ordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, de llegarse a reconocer sería bajo el concepto de “daño a la vida de relación”, el cual se causa únicamente a favor de la víctima directa. En adición, ninguno de los hechos relatados en el escrito de la demanda, la parte actora refiere de manera puntual y concreta, de qué forma se materializó el perjuicio “daño a la vida de relación” de los demandantes con ocasión a los hechos acontecidos el 24 de diciembre de 2023, es decir, no se explica de manera clara y razonada de qué forma y cuáles relaciones exteriores se vieron afectadas por el daño alegado, razón por la cual lo pretendido carece del carácter cierto y, en ese sentido, no tiene vocación de prosperidad. Además, la tasación de los perjuicios pretendidos por la demandante resulta a todas luces exorbitante de cara a los baremos establecidos por la Corte Suprema de Justicia para litigios donde se indemnizan el perjuicio pretendido.

En efecto, en el escrito genitor del proceso se pretende el reconocimiento y pago del “daño por alteración grave a las condiciones de existencia”, el cual no es un tipología de perjuicio que sea reconocida en la jurisdicción ordinaria pues actualmente los daños extrapatrimoniales que se reconoce en la especialidad civil son (i) daño moral, (ii) daño a la vida de relación y (iii) daño a bienes jurídicos de especial protección constitucional, razón por la cual ante un remoto fallo, la pretensión que versa sobre “la alteración grave a las condiciones de existencia” no tiene vocación de prosperidad tal cual fue formulada por el extremo

actor.

Dicho lo anterior, se explica que, la Corte Suprema de Justicia, ha definido el daño a la vida en relación como “la afectación a la «vida exterior, a las relaciones interpersonales» producto de las secuelas que las lesiones dejaron en las condiciones de existencia de la víctima” Cabe reseñar que este tipo de daño “adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho”<sup>5</sup>.

Asimismo, la alta corte ha manifestado que el único legitimado para solicitar su indemnización es la víctima directa:

*“(..). b) Daño a la vida de relación: **Este rubro se concede únicamente a la víctima directa** del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (...)”<sup>6</sup>.*

Ante este panorama, en caso de que la demanda estuviera encaminada a reconocer el daño la vida de relación, igualmente no será procedente puesto que se solicitó por personas que no tienen legitimidad alguna para reclamar la indemnización del referido perjuicio.

En consonancia con lo expuesto, es preciso resaltar lo indicado por el Tribunal Superior de Pereira sobre la carga que le asiste al extremo actor de identificar de manera clara la afectación que ha tenido en sus condiciones normales de vida con ocasión al hecho dañoso<sup>7</sup>:

*“(..). Cuestionaron los demandados y la llamada en garantía el reconocimiento de este perjuicio, por cuanto las razones para ello fueron idénticas a la utilizadas para reconocer el lucro cesante, además que estimaron quedó sin acreditación la alteración de las condiciones del actor con ocasión de la lesión sufrida” (Folios 9-10 y 97-98, cuaderno No.10).*

*Para esta Sala prospera esta alzada, pero por falta de congruencia, puesto que si bien se trata de un perjuicio reclamado (Fisiológico, folio 37, cuaderno principal), lo cierto es que ese hecho en forma alguna se argumentó en la demanda, **faltan datos indicativos de cómo se afectaron las condiciones normales de vida del actor.***

<sup>5</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Exp. 11001-3103-006- 1997-09327-01. M.P. Cesar Julio Valencia Copete

<sup>6</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de junio de 2017. Radicación nº 11001- 31-03-039-2011-00108-01. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

<sup>7</sup> TSDJ de Pereira. Sentencia 438 de 17-09-2019. Rad.: 05001-31-03-007-2007-00532-01. M.P. Duberney Grisales Herrera

**La manera en que se advertía ese perjuicio se pretermitió en el escrito introductor y ha debido serlo como garantía del derecho de defensa de los demandados y para respetar el principio de congruencia de la sentencia (Artículo 281, CGP) (...)**

En este punto, útil es recordar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia<sup>8</sup>, en un caso que negó ese pedimento por haberse dado esa omisión:

*“(...) En efecto, al observar la demanda aducida y su reforma, integradas en un solo documento, encuentra la Corte que el actor fue quien, desde el comienzo, fusionó tanto el detrimento moral como el de vida de relación, por tanto, el ad-quem, se limitó a pronunciarse alrededor de una sola clase de detrimento; la lectura que brindó a lo expuesto por el demandante refleja, de manera fiel, la forma como se presentó y reclamó la indemnización.*

*(...) Dado que se trata de detrimentos distintos, que no pueden ser confundidos, al ser reclamados debió indicarse un referente económico para cada uno de ellos, aspecto que no se hizo; además, su naturaleza, diferente a la del daño moral, comporta una **afectación proyectada a la esfera externa de la víctima, sus actividades cotidianas; relaciones con sus más cercanos, amigos, compañeros, etc.**, a diferencia de los daños morales que implican una congoja; impactan, directamente, su estado anímico, espiritual y su estabilidad emocional, lo que, sin duda, al describirse en el libelo respectivo de qué manera se exteriorizan, deben mostrarse diversos, empero, como se anunció líneas atrás, su promotor cuando expuso el factum del debate describió unas mismas circunstancias como indicadores de los dos daños.*

*“Y, si, en gracia de discusión, la Corte aceptara que en el escrito incoativo fueron pedidos de manera autónoma e independiente los daños morales y de vida de relación, habría que concluir, prontamente, que el impugnante no señaló, puntualmente, de qué forma se generó el daño a la vida de relación, pues, como atrás se indicó, **NO HUBO SEÑALAMIENTO CONCRETO DE LA REPERCUSIÓN EN EL CÍRCULO O FRENTE A LOS VÍNCULOS DE LA ACTORA. ES MÁS, NO SE APRECIÓ O DESCRIBIÓ, EN PARTICULAR, QUÉ NEXOS O RELACIONES SE VIERON AFECTADAS, SUS CARACTERÍSTICAS O LA MAGNITUD DE TAL INCIDENCIA.** Resulta incontrovertible que toda limitación en la salud física o mental de un individuo impacta negativamente su entorno; sin embargo, ante una reclamación judicial, no puede la víctima dejar al Juez conjeturar las repercusiones concretas de esa situación perjudicial y, en el presente asunto, la afectada se despreocupó de indicar las particularidades del detrimento denunciado, luego, no es dable aseverar su existencia real, determinada y concreta.*

<sup>8</sup> CSJ. SC7824-2016.

*En suma, al ser un tema que ni siquiera se fundamentó, mal podría reconocerse, habrá de revocarse ese acápite de la sentencia (...)" (Resaltado fuera de texto).*

De lo anterior se desprende que el daño a la vida en relación debe basarse en afirmaciones concretas que den muestra de cuáles son las afectaciones reales que ha sufrido la víctima en sus condiciones de vida. Sin embargo, en este caso, la parte demandante no acredita de forma real, determinada y concreta la forma en que los procedimientos quirúrgicos practicados afectaron su manera de relacionarse o su cotidianidad.

Es por ello que, se advierte que el extremo actor realizó una solicitud indemnizatoria que en realidad es improcedente, por cuanto que el reconocimiento que invoca es superior para los casos de lesiones más graves. De manera que se evidencia una desmesurada solicitud de perjuicios por concepto de daño a la vida en relación para los demandantes. Claramente, es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación del daño a la vida en relación, en tanto la misma resulta exorbitante. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva de los supuestos daños a la vida de relación que pretende y lejos de los criterios jurisprudenciales fijados por la H. Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, ruego al Despacho tener en consideración que el extremo actor formuló una pretensión encaminada al reconocimiento de una tipología de perjuicio que no es aceptada por la jurisdicción ordinaria, luego entonces no tiene vocación de prosperidad. No obstante, si en gracia de discusión se aceptase que se solicitó el daño a la vida de relación, este es improcedente por cuanto la parte demandante no allegó al acervo probatorio los medios pertinentes, conducentes y útiles que permiten determinar la gravedad de la afectación supuestamente padecida por los aquí demandantes y en todo caso, esta tipología de perjuicios sólo es procedente respecto a la víctima directa.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

## **6. IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DEL SUPUESTO LUCRO CESANTE QUE PRETENDEN LOS DEMANDANTES**

Presento esta excepción para efectos de oponerme al reconocimiento de este concepto por cuanto no se cumplen los presupuestos legales para su reconocimiento. Debe advertirse que no se acredita de manera alguna los supuestos ingresos percibidos por el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) con anterioridad a los hechos del 24 de diciembre de 2023, así como tampoco se prueba que el occiso desarrollara la actividad económica referida, por lo cual no hay lugar al reconocimiento del lucro cesante solicitado.

El lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(...) en cuanto perjuicio, **el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (...) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente** (...) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (...)”<sup>9</sup>. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente:

*“(...) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego, **a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable**, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación*

<sup>9</sup> Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008.

en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (...)"

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante

*"(...) **resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas** o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (...)"*(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma completamente equivocada. En el presente caso, los demandantes estimaron el lucro cesante por valor de \$192.203.218, discriminado de la siguiente manera:

- Para la menor Luisa María Collazos Romero: \$88.290.519
- Para el menor Luis Sebastián Collazos Romero: \$103.912.699

Precisado lo anterior, las sumas pedidas son improcedentes luego que se verifica que en el juramento estimatorio se toma como base un ingreso mensual de \$1.500.000, sin embargo, no existe prueba alguna en el expediente que permita corroborar el ingreso mensual señalado, limitando su "existencia" a las simples afirmaciones realizadas en el escrito petitorio por la parte actora, siendo improcedente su reconocimiento e incluso su liquidación sobre esta base salarial, junto con el 25% correspondiente a las prestaciones sociales teniendo en cuenta la incertidumbre de la existencia de una relación laboral o de índole similar que justifique que la víctima perciba pago alguno por este concepto. Por lo tanto, no encuentra justificación alguna el hecho de que la parte demandante adicione al supuesto ingreso percibido el valor del 25% correspondiente a prestaciones sociales para derivar de ahí el supuesto perjuicio reclamado.

Ciertamente, no se encuentran acreditados los ingresos que percibía el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) con anterioridad al accidente del 24 de diciembre de 2024, así como tampoco la supuesta actividad económica que desarrollaba. Si bien se aportó una certificación laboral, la misma no cuenta con los parámetros legales y jurisprudenciales previstos para dotar de valor probatorio dicho documento y, de manera preliminar se señala que en el acápite de pruebas que solicitará la ratificación de la certificación aportada, por lo cual carecerá de valor alguno hasta que no se surta el respectivo trámite.

De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

### **EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO**

#### **7. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. DEBIDO A QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL ART. 1077 del C. Co.**

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no ha surgido en cabeza de mi representada dado que, en el remoto caso de considerarse que la póliza suscrita por mi representada presta cobertura respecto las pretensiones de la demanda, igual no se demostró la responsabilidad civil extracontractual del asegurado porque, en primer lugar, el señor Sebastián Collazos Ramos intervino en el curso causal del accidente de tránsito al no portar los elementos de protección necesarios para la conducción. Seguidamente, no se acreditó un nexo de causalidad entre las conductas de la pasiva y el daño alegado por la demandante ante la ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 24 de diciembre de 2023 y, por último, tampoco se probó la cuantía de la pérdida.

Para efectos de las solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte Demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

**“(…) ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.**

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad (…)* (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

*“(...) Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)”*

*“(...) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)”*

*“(...) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., Art. 1080) (...)”<sup>10</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio. Según las

<sup>10</sup> ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

**(i) La no realización del Riesgo Asegurado.**

De llegarse a considerar que mediante la póliza No 1655 las partes ampararon el riesgo de la responsabilidad civil extracontractual causada por la conducción del vehículo asegurado, igualmente debe concluirse que dicha responsabilidad no se estructuró comoquiera que (i) la parte demandante no acreditó que el accidente de tránsito ocurrido el 24 de diciembre de 2023 hubiere devenido de la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, pues los demandantes basa sus infundadas pretensiones de forma única y exclusiva en el IPAT, documento este que carece de virtualidad para dictaminar una responsabilidad como la pretendida por los demandantes. (ii) el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) desacató la normatividad de tránsito por no portar los elementos de protección requeridos (casco y chaleco reflectivo), los cuales se tornar aún más relevantes para salvaguardar la seguridad de los conductores en vías nacionales y en horas nocturnas, tal como se presentó en el caso objeto de estudio. Adicionalmente, debe resaltarse que el señor Collazos (QEPD) tampoco contaba con licencia de conducción que lo facultara para el ejercicio de la actividad peligrosa que estaba realizando al momento del deceso.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria. Pues la parte demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo de los demandados y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

Por lo visto, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, es decir la responsabilidad civil extracontractual, toda vez que nos encontramos ante una situación en la se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y, consecuentemente, no se configuraron los presupuestos axiales para la declaratoria de la responsabilidad que se pretende endilgar a la pasiva. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora.

**(ii) Acreditación de la cuantía de la pérdida.**

Es claro que en el presente caso no procede el reconocimiento de indemnización alguna, toda vez que la parte actora pretende daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados tras el supuesto accidente de tránsito acontecido el 24 de diciembre de 2023, lo anterior sin aportar medios probatorios que

permitan colegir la existencia y cuantía de la tipología de perjuicios solicitados, tal como se puntualizará a continuación:

- Frente al lucro cesante: No se probó el ingreso percibido por el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) antes de que acaeciera el accidente, motivo por el cual no es procedente el reconocimiento de lucro cesante pues no hay certeza de la cuantía a indemnizar.
- Frente los perjuicios morales: No obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 24 de diciembre de 2023 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.
- Frente al “daño por alteración grave a las condiciones de existencia”: Debe iterarse que (i) no es una modalidad de daño que sea reconocida en la jurisdicción ordinaria, tal como fue solicitada por la parte demandante (ii) en caso de llegarse a reconocer bajo la tipología de daño a la vida de relación, es improcedente por cuanto este d se reconoce exclusivamente en favor de la víctima, por lo que las demandantes carecen de legitimada para reclamar su pago, (ii) no obra en el plenario prueba sobre alteración en la cotidianidad causada a los demandantes con ocasión al accidente de tránsito y (iv) los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.

Ahora bien, no es factible afectar la póliza No. 1655 toda vez que no se acreditó la cuantía de las pérdidas ocasionadas con el hecho que motivó el presente litigio, lo anterior teniendo en cuenta que reconocer perjuicios que no están debidamente demostrados contraía el principio meramente indemnizatorio que reviste a los contratos de seguros.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse que la póliza no podrá ser afectada por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, ni la cuantía de la pérdida, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por el contrario, se observa de manera evidente la completa ausencia de elementos materiales probatorios dentro del expediente que permitan endilgar responsabilidad al extremo pasivo, de acuerdo a lo reiteradamente manifestado. Además, no se probó la cuantía de la pérdida puesto que la parte demandante se limitó a indicar los supuestos perjuicios sufridos sin allegar pruebas útiles, pertinentes y conducentes para acreditar la existencia y cuantía de los mismos. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## 8. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA No. 1655 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que la parte actora pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

*“(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”<sup>11</sup> (Negrita por fuera de texto).*

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito

<sup>11</sup> Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

están indebidamente cuantificadas, por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, dentro del cual la activa prende el reconocimiento de las siguientes sumas de dinero:

- La suma de \$191.203.218 por concepto de lucro cesante, la cual es improcedente pues no se acreditan los ingresos devengados por el señor Sebastián Collazos Ramos (QEPD) con anterioridad al accidente de tránsito de 24 de diciembre de 2023.
- 200 SMLMV por concepto de daño moral, los cuales son improcedentes toda vez que no obra en el plenario prueba sobre congoja causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 24 de diciembre de 2023 e, igualmente, los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.
- 200 SMLMV por concepto de daño a la vida de relación, los cuales son inexistentes por cuanto, (i) es una tipología de perjuicio que se reconoce exclusivamente en favor de la víctima, por lo que las demandantes carecen de legitimada para reclamar su pago, (ii) no obra en el plenario prueba sobre alteración en la cotidianidad causada a las demandantes con ocasión al hecho acontecido el 24 de diciembre de 2023 y (iii) los montos pretendidos por la parte activa desconocen los baremos jurisprudenciales.

Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de la demandante. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante consolidado y futuro, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

**9. LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. SE CIRCUNSCRIBE EN PROPORCIÓN A LA CUANTÍA DE SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL, DE ACUERDO CON EL COASEGURO CONCERTADO EN LA PÓLIZA TODO RIESGO MAQUINARIA Y EQUIPO No. 1655 CON COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Y BBVA SEGUROS GANADERO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

Esta excepción se formula teniendo en cuenta que de conformidad con el tenor literal de la precitada Póliza No. 1655, en la cual concertó un coaseguro respecto del mismo contrato de seguro con Compañía Mundial de Seguros S.A. y BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A., así:

<b>COASEGURO CEDIDO</b>	
<b>NOMBRE COMPA#IA</b>	<b>% CED</b>
330 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.	77,00
270 COMPA#IA MUNDIAL DE SEGUR	10,00
550 BBVA SEGUROS GANADERO CIA	13,00

En ese sentido, existiendo un coaseguro que implica que el riesgo está distribuido entre mi representada y las compañías de seguros mencionadas, debe tenerse en cuenta que en el hipotético evento en que configure la obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro aludido, la responsabilidad de cada una de las aseguradoras está limitada al porcentaje antes señalado, pues de ninguna manera puede predicarse una solidaria entre ellas.

La figura del coaseguro se encuentra regulada en el artículo 1092 del Código de Comercio, norma que establece lo siguiente:

*"(...) En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad (...)" (Subraya fuera del texto).*

Lo estipulado en la norma transcrita se aplica al coaseguro por estipulación expresa del artículo 1095 del mismo estatuto, la cual consagra:

*"(...) Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro (...)" (Subraya fuera del texto).*

Tomando el Concepto No. 2001036918-2 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia<sup>12</sup>, el coaseguro:

*"(...) es un conjunto de compañías de seguros, entre las cuales no existen relaciones recíprocas de aseguramiento, pues tales aseguradoras asumen responsabilidades individuales frente a un mismo riesgo, cuya iniciativa nace del asegurado que quiere hacerlas partícipes o de una de éstas con la aceptación del interesado, para efectos de hacer la repartición del riesgo.*

*Es de agregar que la partición de las primas debe guardar proporción con la cuota asignada a cada entidad aseguradora y en igual proporción la indemnización correspondiente en el evento de ocurrir un siniestro (...)"*

En ese sentido, existiendo un coaseguro, es decir estando distribuido el riesgo entre mi representada y Compañía Mundial de Seguros S.A. y BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A., debe tenerse en cuenta, sin perjuicio de la inexistente cobertura ya antes alegada respecto la póliza invocada, en el hipotético evento en que configure la obligación de indemnizar en virtud del contrato de seguro mencionado, la responsabilidad de las aseguradoras mencionadas está limitada al porcentaje antes señalado, pues de ninguna manera puede predicarse una solidaria entre ellas.

Como consecuencia de lo anterior, que en caso de una eventual condena en contra de mi representada frente a riesgos cubiertos por la Póliza No.1655, el Despacho deberá limitar la cuantía de dicha eventual condena al porcentaje de participación que Chubb Seguros Colombia S.A. tiene en virtud del coaseguro, es decir, un (77%), sin perjuicio del deducible pactado y demás deducciones a que haya lugar.

Respetuosamente solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

**10. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA NO. 1655, CON SUS SUBLÍMITES Y DEDUCIBLES**

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. en virtud de la póliza vinculada. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

---

<sup>12</sup> Superintendencia financiera de Colombia. Concepto No. 2001036918-2. Septiembre 26 de 2001.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

*“(…) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…).”*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…).”<sup>13</sup>*

Por otra parte, resulta menester traer a colación el concepto de deducible en el contrato de seguro, el cual, a luces del artículo 1103, corresponde a una cuota en el riesgo o en la pérdida que deberá soportar el asegurado en el caso en el que se haya pactado.

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza No. 1655 que se adosa con esta contestación.

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin

---

<sup>13</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 5952. Diciembre 14 de 2001.

perjuicio que en el caso bajo análisis Chubb Seguros Colombia S.A. no puede ser condenada. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites, sublímites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

## 11. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. Y LOS DEMÁS SUJETOS QUE INTEGRAN LA PARTE DEMANDADA

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia<sup>14</sup> ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte<sup>15</sup> igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

<sup>14</sup> Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez

<sup>15</sup> Ibídem.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

## **12. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA No. 1655 EMITIDA POR LA COMPAÑÍA CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna otra exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

Particularmente, en el caso de marras se pretende endilgar responsabilidad civil extracontractual derivada de la conducción del vehículo de placas FCU 90C y, por lo tanto, se configura la EXCLUSIÓN de cobertura consignada en la Cláusula II de las Condiciones de la Póliza de Todo Riesgo Maquinaria y Equipo No. 1655:

**N. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y DERIVADA POR EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PRESENTE PÓLIZA.**

Igualmente, como lo explica Ospina Fernández (2005), este postulado se fundamenta en la independencia que otorga el legislador a los particulares para regular sus propias relaciones sociales. En otras palabras, se otorga eficacia jurídica a la iniciativa privada para atribuir los efectos que mejor se enmarquen a su propósito particular<sup>16</sup>. Así las cosas, CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., determinó que la póliza bajo la cual se vincula a la misma a este trámite no brindaría cobertura respecto de la responsabilidad civil extracontractual derivada del uso del vehículo de placas FCU 90C, exclusión que debe ser vista a luces del amparo único de la Póliza No. 1655, el cual definido de la siguiente manera:

*“(...) BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARA LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS ESPECÍFICAMENTE RELACIONADOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO, O SE ENCUENTREN BAJO CUIDADO,*

<sup>16</sup> Ospina Fernández, G. (2005). TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO. Editorial Temis S.A.

*TENENCIA O CONTROL DEL ASEGURADO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO O DE COMODATO, DENTRO DEL TERRITORIO ESPECIFICADO EN LA PÓLIZA, **CONTRA TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO FÍSICO, PROVENIENTE DE CUALQUIER CAUSA ACCIDENTAL Y EXTERNA, A EXCEPCIÓN DE LOS QUE SE ENUMERAN EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE** (...)" (Subraya y negrilla fuera de texto)*

De la lectura precitada resulta a todas luces evidente que la póliza No. 1655 tiene cobertura respecto los daños materiales que se llegasen a causar al vehículo asegurado, excluyendo los eventuales perjuicios que puedan ocasionarse a terceros por la conducción de dicho automotor y, en ese orden de ideas, es evidente la ausencia de cobertura material respecto de las pretensiones enervadas en el caso objeto de estudio.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro vinculada al proceso, en sus condiciones generales señalan una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse la exclusión propuesta o alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. 1655 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### **13. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

### **14. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS**

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

## **V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE**

### **l) Ratificación de documentos provenientes de terceros:**

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: “(...) *Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (...)*”.

Por supuesto, esta ratificación concebida en la legislación procesal actual, le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener que lo ratifiquen sus respectivos autores, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga en sus hombros la carga de hacerlos ratificar de quien los obtuvo o creó, si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente ésta se hace, como lo consagra el citado artículo; y en tal virtud, solicito al Despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes

de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y son los siguientes:

1. Certificación "CI-24-05" emitida el 20 de mayo de 2024 por el contador público Waldo Amézquita Tascón, identificado con C.C. 16.700.138 de Caliy tarjeta profesional No. 27171- T expedida por la Junta Central de Contadores.

## **VI. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.**

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

### **1. DOCUMENTALES**

- Copia del Póliza Todo Riesgo Maquinaria y Equipo No. 1655.
- Condicionado general aplicable a la póliza No. 1655, contenido en le proforma 07/09/2020-1305-P-12-CLACHUBB20180010-000I

### **2. INTERROGATORIO DE PARTE**

- a. Comendidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a la demandante KATHERIN YULIETH ROMERO MONTILLA a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandante podrá ser citada en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- b. Comendidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor EDISON NAYIBER SOLARTE, en su calidad de conductor del vehículo de placas FCU 90C, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en su contestación.
- c. Comendidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor EDGAR ESCOBAR SANTACOLOMA, en su calidad de representante legal de Ingenio del Cauca S.A.S, o quien haga sus veces, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en su contestación.

### 3. DECLARACIÓN DE PARTE.

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de los contratos de seguro Póliza Seguro vinculada.

### 4. TESTIMONIALES.

Solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, quien tiene domicilio en la ciudad de Popayán y puede ser citada en la Carrera 32 bis No. 4 16 Popayán y correo electrónico darlingmarcela1@gmail.com para que declare sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza Seguro No. 1655, los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.

### 5. DICTAMEN PERICIAL

En los términos del artículo 227 del Código General del Proceso anuncio que me valdré de dictamen pericial emitido por un ingeniero que versa sobre la reconstrucción del accidente de tránsito ocurrido 24 de diciembre de 2023, en el que se vieron involucrados el vehículo de placas FCU 90C, conducido por Edison Nayiber Solarte, y la motocicleta de placas UQE1D, conducida por el Sebastián Collazos Ramos (QEPD). No es posible aportarlo en este momento porque para su respectiva elaboración deben realizarse múltiples actuaciones, tales como análisis técnicos de los peritos, traslado al lugar de los hechos a fin de lograr una mayor identidad del espacio geográfico en el que tuvo lugar los hechos que suscitaron el presente litigio.

La prueba pericial enunciada es conducente, pertinente y útil por cuanto es funcional para verificar desde un punto de vista técnico, los hechos acaecidos el 24 de diciembre de 2023, en el que se vieron involucrados el vehículo de placas FCU 90C, conducido por Edison Nayiber Solarte, y la motocicleta de placas UQE1D, conducida por el Sebastián Collazos Ramos (QEPD). Criterio técnico que permitirá acreditar la ocurrencia y causas del accidente a partir de una óptica científica en uso de la física y otras ciencias aplicadas que permiten reconstruir fielmente las situaciones e hipótesis que rodearon el accidente de tránsito el cual es objeto del litigio.

Se anuncia esta prueba en los términos indicados

### 6. INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

## VII. ANEXOS

- Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- Poder general conferido al suscrito para actuar en nombre de Chubb Seguros Colombia S.A.
- Certificado de existencia y representación legal de Chubb Seguros Colombia S.A. expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Certificado de existencia y representación legal de Chubb Seguros Colombia S.A. expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Llamamiento en garantía formulado a COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. en cuaderno aparte.
- Llamamiento en garantía formulado a BBVA Seguros Ganadero Compañía de Seguros S.A., hoy BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. en cuaderno aparte.

## VIII. NOTIFICACIONES

Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados, donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

Mi representada Chubb Seguros Colombia S.A., recibirá notificaciones en la Carrera 7 No. 71 – 21 To BP 7, de la ciudad de Bogotá, correo electrónico: [notificacioneslegales.co@chubb.com](mailto:notificacioneslegales.co@chubb.com)

Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co).

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA.**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.